

SOBRE LA RELACIÓN ESTADO-MOVIMIENTOS SOCIALES. LA MIRADA “PIQUETERA” EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Cyntia Itatí Núñez

INTRODUCCIÓN

Las crisis suelen ser ocasiones propicias para la aparición de nuevas formas de representación, organización y acción (Ansaldi, 2007), por lo que es posible observar que los momentos de mayor movilización y protesta callejera se dan en períodos de colapso financiero. Por lo tanto, y según lo reconoce Mirza (2006), la correlación entre el proceso de pérdida de confianza en los partidos políticos y de desinstitucionalización, más el estímulo al desarrollo de movimientos sociales, es atravesada por variables económicas.

La última gran crisis que estallara en la Argentina, en diciembre de 2001, encontró al país inmerso en distintas formas de movilización y manifestación ciudadana: piquetes, cacerolazos, huelgas, fábricas tomadas, asambleas. Esta situación significó un renovado protagonismo de actores y movimientos sociales y la aparición de nuevos movimientos, muchos de ellos de anclaje socioterritorial (Mirza, 2006), que desconfían de toda forma de partidismo, creen corrompida la democracia por la acción de los partidos políticos y niegan su asociación a ellos.

La relación que el Estado argentino ha mantenido con los movimientos sociales se ha ido transformando de acuerdo con los distintos gobiernos nacionales. En tiempos de auge de implementación de políticas neoliberales, las dinámicas de movilización de agrupaciones golpeadas por estas medidas se caracterizaron por la confrontación –reclamo de mejores condiciones de vida y rechazo al neoliberalismo como política de Estado–. Por parte, las respuestas del gobierno a través de las políticas públicas resultaban insuficientes, cuando no significaban persecución, rechazo, deslegitimación de las agrupaciones y falta de escucha de los reclamos. Los movimientos crearon, entonces, condiciones para el desarrollo de nuevos modos de integración social, presentes tanto en los

tipos de asociatividad promovidas por cada uno de ellos como en la replicación de mecanismos de subsistencia (Palomino, 2005), formas que fueron revalorizadas como respuesta a la crisis de 2001. Analizando un segundo momento de la relación Estado/organizaciones sociales, Massetti (2008) reconoce que, a partir del año 2003 –con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia–, se acrecentó un proceso que él denomina “ongización”, que llevó a que muchas organizaciones se conformaran como asociaciones civiles con el fin de obtener recursos financieros –tanto de programas nacionales como internacionales–. Esta situación promovió el diálogo entre las organizaciones y el Estado y dotó a las agrupaciones de un formalismo necesario para vehicular reclamos y gestionar recursos.

MOVIMIENTOS DE DESOCUPADOS: LA APARICIÓN DE LOS PIQUETEROS

En un período de duras reformas económicas y laborales, creciente exclusión, empobrecimiento y pobreza estructural, la privatización de YPF marcaría un hito en la década de los noventa en relación con el surgimiento de estos movimientos sociales. Como respuesta al masivo despido de empleados de la petrolera YPF que se produjo en 1996 en Cutral-Có y en 1997 en Gral. Mosconi, las prácticas que se desplegaron tomaron la forma de la acción directa (específicamente el piquete), las asambleas y las acciones territoriales. Los rasgos que asumieron estos levantamientos serán tomados como ejemplos y replicados luego por organizaciones nacientes dentro de territorios del Conurbano Bonaerense. Y posteriormente, en 2001, a raíz de la gran crisis, diversas organizaciones piqueteras se desplazaron desde el interior y la periferia bonaerense e irrumpieron en repudio al gobierno nacional protestando en Capital Federal.

Estos grupos “piqueteros”, aunque comparten características comunes a lo largo y ancho del país, guardan una gran heterogeneidad en su interior. Sobre ellos escribe Luis Oviedo, militante –ya fallecido– del Polo Obrero:

El movimiento piquetero reúne a distintos componentes sociales explotados, desde los obreros industriales desocupados que pasaron por la experiencia de la lucha sindical, a una enorme masa empobrecida de los barrios, de jóvenes y de amas de casa, que no ha pasado por la “escuela” de la fábrica y el sindicato (Oviedo, 2004).

Como se puede observar, este gran movimiento proviene preferentemente de dos estratos particulares: los asalariados –hayan o no perdido el empleo y tengan o no experiencia sindical– y los grandes contingentes que no tienen experiencia laboral formal –compuestos mayoritariamente por jóvenes y mujeres–. Dados estos rasgos de escasa presencia de una cultura tradicional del trabajo, Svampa (2005) plantea que las organizaciones debieron valerse de otros lugares de producción de disciplina y solidaridad: en primer lugar, del trabajo comunitario, en tanto trabajo territorial y para la satisfacción de necesidades

inmediatas;¹ y en segundo lugar, de la experiencia asamblearia –como práctica de democracia directa–. A estos dos espacios reconocidos por Svampa, agregaríamos la acción directa –cortes de ruta, paros y piquetes–, en tanto esfuerzos autónomos de crear y recrear nuevas formas de articulación laboral y social (Palomino, 2005) para conformar los modos de acción, producción identitaria y organización colectiva de estos grupos.

GOBIERNO PROVINCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y MOVIMIENTO DE DESOCUPADOS

La administración de Néstor Kirchner colocó a la generación de empleo como el medio para devolver equilibrio al país. En consonancia con las medidas nacionales, el gobierno provincial se presenta como militante de un plan nacional integral que promueve una política de inclusión social tendiente a crear empleo. Las estrategias vinculadas a estas políticas permiten el acceso de las provincias a programas y paquetes de planes que las mismas anuncian fervorosamente.

El Estado nacional ha dado mucho protagonismo a las agrupaciones sociales, cuyo número, a partir de la asunción de Néstor Kirchner, aumentó considerablemente. Es clave, además, observar que la pérdida de confianza de la población en los partidos políticos –más aún en los tradicionales–, sumada a la crisis de representatividad que sufrió el Estado, sobre todo a partir de la segunda mitad de los noventa, llevó a la clase dirigente a conformar alianzas estratégicas que le permitieron llamar a la participación de las organizaciones sociales desde una postura que excede a las propuestas vinculadas a los partidos de derecha. En este marco, convocan a las organizaciones desde frentes más amplios, como “Chaco Merece Más” del actual gobernador de la provincia, o como “Frente Para la Victoria”, desde el cual Néstor Kirchner llamó en 2003 a las organizaciones de los sectores sociales más empobrecidos.² Según textos oficiales, esta medida respondía al objetivo o propósito de

[...] recuperar las capacidades territoriales que habían sido enterradas bajo las leyes del mercado. [Por lo que] se convocaron a las organizacio-

1 Este rasgo se entiende si se observa que en la base de estas agrupaciones se pone en primer plano la resolución de la subsistencia, lo que las llevó a desplegar prácticas y espacios organizativos para presionar por el acceso a subsidios de empleo o bolsones de alimentos, que Palomino (2005) entiende como intentos de los movimientos de fortalecer una economía social y solidaria que recupera formas seculares, como las cooperativas, y explora nuevas formas organizativas débilmente institucionalizadas aún.

2 Pero, cuando Néstor Kirchner asume en 2008 la presidencia del Partido Justicialista (PJ), junto a Cristina Fernández, “sellaron una alianza política con los sectores más conservadores del peronismo, así como con los llamados ‘radicales K’” (Svampa, 2008), perdiendo así el apoyo de algunas organizaciones que sintieron esa elección como una traición a sus ideologías antiderecha. Ambas alianzas echaron por tierra la ilusión populista de aquellas organizaciones sociales que apostaron a una suerte de cambio político “desde adentro” o a la construcción de una especie de “transversalidad” más allá de la estructura rígida del partido. Un caso particular es el del Movimiento Barrios de Pie, el cual le quita su apoyo a Néstor Kirchner desde el momento de su asunción a la presidencia del PJ.

nes sociales y comunitarias en la recuperación de la participación y la construcción colectiva de ciudadanía; se pasó del concepto de “beneficiario” al de “sujeto de derecho” [negritas en el original], instalando la igualdad como ampliación de la ciudadanía (Kirchner, 2010a).

Entre las propuestas del gobierno para la inclusión, se promueve el trabajo en conjunto con organizaciones sociales en el marco de cooperativas para la construcción de viviendas destinadas a los mismos grupos. Esta posibilidad es entendida por el primer mandatario de la provincia como un “gran salto” dentro de lo que reconoce como un modelo productivo de participación; más aún, piensa que esta estrategia debería conformarse como una metodología usual del Estado vinculada al trabajo constante.³ Mediante esta medida, desde el gobierno se asume que se solucionan dos problemáticas actuales muy acuciantes: trabajo y emergencia habitacional.

Los planes de construcción de viviendas se sustentan, principalmente, en dos pilares: el plan de cooperativas “Argentina Trabaja” –que se desprende del Programa “Ingreso Social con Trabajo”, el cual, en palabras de Alicia Kirchner (2010a), busca reincorporar el trabajo, los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución de los ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas– y la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante su plan “Sueños Compartidos”.⁴

En otras ocasiones, se programó la construcción de viviendas a cargo de movimientos sociales que son subsidiados con materiales y herramientas y se encargan de la planificación, la programación de costos y la edificación. Es el caso del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 17 de julio, para el cual esta experiencia significó, además de la posibilidad de acceder a la vivienda propia, una modificación en el modo de verse a sí mismos como hombres y mujeres “capacitados para el trabajo”.

A través de estas estrategias, más que ocuparse de solucionar problemas laborales y habitacionales, el gobierno está valorando a los movimientos sociales y organizaciones de base como “capitales sociales” (Merklen, 2005) que es conveniente mantener más cercanos que alejados del gobierno. Para Lo Vuolo, el modo de regulación de la cuestión social que el Estado despliega se mantiene estático en la medida en que:

[...] no es [su objetivo] la erradicación de las expresiones más acuciantes (pobreza, desempleo, lazos precarios en materia laboral y relacional, etc.), sino administrar estos problemas de forma tal de no alterar el funcionamiento considerado correcto y normal de la economía y (nosotros diríamos sobre todo) de la sociedad (Lo Vuolo, 2009).

3 En <<http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=50845>>. Fecha de consulta: 03/06/2011.

4 Entre otros, también se llevan adelante los programas “Microcréditos”, “Manos a la Obra” y “Herramientas para la Inclusión Social”.

Asimismo, en 2010 el gobierno, por intermedio de cooperativas de trabajo, promovió la posibilidad de obtener microcréditos con subsidios de herramientas y la oportunidad de integrar el monotributo social, a través del cual los beneficiarios podrían eventualmente acceder a la jubilación y a tener la cobertura de una obra social. El gobierno considera que esta es una garantía de trabajo en blanco. En relación con esto, y haciéndose eco del mandato nacional, el coordinador del Polo Chaco Textil, Teodoro Giancoff, sostiene que es intención del gobierno “transformar los movimientos sociales en movimientos productivos”.⁵

MOVIMIENTOS PIQUETEROS EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Los movimientos sociales hallados en la región presentan dos rasgos principales: 1) por un lado, la gran mayoría de los grupos pertenece a movimientos de escala nacional que cuentan con adherentes en la región; es el caso de movimientos como: Libres del Sur, Polo Obrero, Barrios de Pie, Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez (CUBA-MTR), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Territorial Liberación (MTL). Otros grupos se inician como afiliaciones a organizaciones que funcionan a lo largo del país, pero se separan ante el surgimiento de diferencias; dos ejemplos claros son el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)-Mecha, que funciona en Castelli, y el Movimiento Clasista y Combativo (MCC); 2) por otro lado, encontramos movimientos de origen regional surgidos de situaciones puntuales que experimentó la provincia; es el caso del MTD San Martín que, luego de diversas contradicciones internas, se subdividió y dio lugar al Movimiento 17 de julio, el cual, a su vez, se escindió y dio origen al Movimiento Emerenciano Sena.⁶ Estas organizaciones se pueden calificar como movimientos de trabajadores (desocupados y ocupados) o “piqueteros”.

En cuanto el tamaño de los grupos, es difícil de especificar dado que no se lleva registro formal y que, además, cuentan con un conjunto de personas que participan activamente y con otro grupo, generalmente mayor, que adhiere a participar en marchas o protestas. De todos modos, se puede considerar que los movimientos de escala nacional tienen un gran número de miembros –que se mide en miles– que se hallan desperdigados por casi todo el país; en cambio, entre los movimientos de influencia provincial o zonal, encontramos dos grupos medianos –cuyos integrantes se miden en cientos–, como el 17 de julio y el Emerenciano Sena; y los restantes son aún más pequeños.

5 Asimismo, agrega que: “A nivel nacional, tengo órdenes de la Ministra Alicia Kirchner de no excluir a estos grupos sociales y hacer una transformación de los mismos en movimientos productivos para que comencemos a transitar por otros caminos que no impliquen asistencialismo, sino emprendimientos que sean sustentables por sí mismos” (en: <<http://www5.chacoprensa.net/?pag=noticia&nid=11192>>).

6 También es posible encontrar agrupaciones compuestas por grupos originarios –aborígenes– o que los representan, como el Movimiento Nacional Comandante Andresito, de origen misionero aunque con grupos adherentes en la Provincia del Chaco.

Algunas características

El grado de organicidad (estructura formal o no, recursos, normas)

En todos estos grupos se mantiene la organización por delegaciones que representan zonas o barrios de la ciudad, estructura que responde a una dinámica nacida a mediados de los noventa, en la que se conformaban redes interbarriales que efectivizaban las demandas confrontativas al Estado. Los grupos se reúnen periódicamente y deciden mediante asamblea y plebiscito. En opinión de sus integrantes, esta estrategia colabora en el mantenimiento de una relación igualitaria y horizontal. La estructura, con su cuerpo de delegados y sus asambleas, es herencia de las viejas organizaciones de trabajadores (Almeyra Casares, 2005).

Dado el alto nivel de formalización de los vínculos entre los integrantes, la estructura organizacional consensuada –normas comunes, reglas y métodos de acción respetados por todos–, además del reconocimiento de un líder –presidente o dirigente– que los representa ante los medios y los gobiernos, consideramos que los grupos poseen un alto grado de organicidad, aun reconociendo que puede darse una cierta dispersión entre los integrantes que participan más asiduamente y los que lo hacen en términos de actividades concretas (marchas, talleres, etc.).

Identidades

Las organizaciones tienen su raíz en los momentos de mayor decadencia política y social del país. Es más, se reconocen como producto de ese tiempo. Son hombres y mujeres –éstas en mayor número– que perdieron el trabajo o que nunca tuvieron la oportunidad de un empleo en blanco. Una gran parte de estos grupos está conformada por jóvenes que intentan iniciarse en el mundo laboral. Estos son rasgos compartidos por numerosas organizaciones a nivel país. Así también, es posible ver cómo estos grupos adoptaron nombres, estructuras y posiciones que fueron consensuadas a lo largo de todo el país, a partir de una unión y del reconocimiento formal de todas las organizaciones sociales que surgieron en el período 2000-2002.

Organizaciones como el Movimiento 17 de julio o el Movimiento Emerenciano adoptan la sigla MTD, en la cual se reconocen como movimiento de trabajadores desocupados, rechazando el mote de “piqueteros”. Este rechazo se funda en la desvalorización de la opinión pública y en la consideración despectiva del Estado con respecto a esa forma de protesta. Al respecto, nos dice un entrevistado: “ese mote nos puso el gobierno, no es lo mismo matar un desocupado que matar un piquetero [...] y la gente que dice: ‘está bien, si está todo el día en la calle’” (G. G., MTD 17 de julio).

En esta afirmación se puede ver que el término “piquetero” revela una fuerte carga valoriva y social. El entrevistado asume que bajo esa denominación se desestima a las organizaciones y se las criminaliza: en todo caso, matar a un

desocupado es matar a una persona que por el momento no cuenta con trabajo formal, pero matar a un piquetero es perseguir a los parias sociales.

Si hablamos de la pertenencia de estos grupos, sea a partidos políticos o a alguna corriente ideológica, podemos decir que hay una fuerte base de comunistas, trotkistas o socialistas tanto en el escenario nacional como entre sus adherentes regionales. El Movimiento 17 de julio se declara independiente de toda ideología, partido político o movimiento nacional.

Alcance territorial

Los grupos elegidos fueron seleccionados atendiendo a su mayor visibilidad pública y política, pero, por sobre todo, por su gran capacidad de convocatoria de personas, organizaciones e instituciones –que se revela en una gran adhesión de grupos y movimientos del interior de cada provincia–. Las propuestas, especialmente aquellas referidas a marchas y movilizaciones, toman fuerza gracias al apoyo visible y presencial de muchas personas que, en ocasiones, viajan hacia la capital para unirse al grupo convocante. Esto se entiende como una alta capacidad de convocatoria y movilización, desde el punto de vista de las agregaciones: “hoy tenemos presencia y adquirimos una legitimidad que nos costó mucha persecución y mucha lucha”, declaró Emerenciano Sena a un diario local.⁷

LA MIRADA “PIQUETERA” Y LA PROPUESTA: “LUCHAR CONTRA LAS MIGAJAS”

Pese a todas las estrategias de inclusión que se enuncian desde los gobiernos nacional y provincial, los movimientos sociales se muestran descontentos con la situación social. Emerenciano Sena, representante del movimiento que lleva su nombre y que es uno de los grupos piqueteros de más fuerte presencia, encuentra que no hay reales cambios y denuncia la existencia de “la misma cantidad de desocupados, colas en los hospitales, analfabetos y desnutrición”.⁸

En relación con esto, los movimientos consideran a las propuestas de los gobernantes como una estrategia política que reconoce el peso de las organizaciones, por lo que les resulta conveniente mantenerlos calmados y dependientes de la voluntad política: “El gobierno lo que busca es que nosotros estemos en la ignorancia y dependamos de ellos con una bequita de mierda y una bolsita de mercadería” (G. G., MTD 17 de julio).

En cuanto a la postura frente a las becas y los programas sociales, en el marco del Primer Encuentro Regional de Mujeres Pobres, Emerenciano Sena aseveró que el gobierno nacional quiere asegurar –por 30 o 50 años más– la pobreza de los sectores más desfavorecidos mediante la promoción de más becas y la actual asignación universal por hijo. Pero, además, los planes y subsidios

7 Diario Norte, 10/10/2010 (<<http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=55942>>).

8 *Ibidem*.

similares son, según estos grupos, medios que el gobierno utiliza para “hacer política”, una cuestión que podríamos entender como “hacer negocios”, dado que utilizarían a las becas para conseguir adherentes movilizados por medio de los “punteros”; un entrevistado nos decía: “El gobierno es el que ofrece el plan social, porque el gobierno es el que hace política con eso; nos da 5 a nosotros y reparte 50 para sus punteros” (T. L., MTD 17 de julio).

Refiriéndose a los resultados de la aplicación de las becas, Charo Alcire, representante del Movimiento Clasista y Combativo (MCC), denuncia que el gobierno se equivoca al anunciar la reducción del desempleo computando como empleo genuino las actividades asociadas a las becas y planes sociales, porque estas no representan estabilidad laboral. En todo caso, demuestran la precarización que padece la provincia como consecuencia de la falta de políticas claras para enfrentar el desempleo de la población. Esta práctica de contabilizar como empleo a las medidas de asistencia es un mecanismo utilizado por los gobiernos para aumentar la credibilidad en las políticas implementadas y como un modo de sobredimensionar el crecimiento económico y la disminución de la desocupación. Ya sucedía lo mismo con otros planes sociales como “los Jefes y Jefas de Hogar”; como lo denuncia Giosa Zuazúa, tal plan:

[...] influyó, entre otras cosas, para descontar de las estadísticas básicas de empleo a aquella población desocupada que, al recibir el beneficio de este Plan y al comprometerse a una contraprestación laboral, pasó a computarse como ocupada. Por ello, hacia fines de 2002 el desempleo abierto disminuyó (Giosa Zuazúa, 2006).

Es por ello que las organizaciones sociales suponen que las políticas públicas nacionales y provinciales no conducen a ningún lado puesto que no otorgan legitimidad, dignidad y estabilidad a las poblaciones más necesitadas. Es así que consideran a la construcción de viviendas –política social aclamada por el gobierno como la estrategia más eficaz en la generación de empleo– como medidas subsidiarias de corto plazo que mantienen al trabajador en situación precaria –“negreados por el Estado provincial”–.⁹ En oposición a esta situación, reclaman que los obreros sean considerados dentro de la figura del trabajador formal. El beneficio de los planes y programas contra la desocupación está muy alejado de la condición de empleo genuino –situación que, incluso, se reconoce desde el gobierno.¹⁰

Mediante el reclamo de formalidad, los grupos demandan ser considerados e incluidos como ciudadanos. Lograr la categoría de trabajador es el modo por el cual accederían a la ciudadanía y a una interpelación distinta al Estado,

9 *Ibíd.*

10 “Empleo genuino es aquel empleo que se genera de manera real, efectiva y registrada. Se sustenta en la fuente que lo genera. No es un empleo precario ni temporal. No se ve limitado por razones de temporada o por una demanda particular. Se establece de manera efectiva en el mercado laboral formal, con todos los derechos y todos los deberes que ello conlleva, y se sostiene en el tiempo” (Kirchner, 2010b).

porque esa condición les otorgaría el derecho a demandar de modo legítimo y a participar de los asuntos públicos. Entendemos, como Eguía *et al.* (2007) que la ciudadanía es, principalmente, un estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes.

La necesidad de ser políticos en un país democrático¹¹

De cara al actual año electoral, distintos movimientos sociales dialogaron con la intención de conformarse como fuerza opositora real y, en este sentido, pronunciarse como partido político. Es así que, en oportunidad del Primer Encuentro Regional de Mujeres Pobres –evento organizado por cuatro movimientos de desocupados–, se presentó oficialmente el Partido Movimiento Social, donde están representados –mediante sus dirigentes como candidatos– tres movimientos de la Provincia del Chaco. El Partido Movimiento Social se reconoce como “carne” del pueblo, destacando la importancia de que los candidatos a funcionarios provengan del campo popular.¹² Proponen ser vistos como ajenos al sistema partidario tradicional y han entablado diálogos con los partidos más chicos en la búsqueda de no repetir los errores de los partidos mayoritarios. En relación con esto, Mirza (2005) subraya que ha sido la autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos, del Estado y de cualquier otra organización económica o religiosa lo que les ha permitido construir una identidad propia y asumir la representatividad conferida por los sectores sociales que han depositado en ellos la legitimidad de la lucha y los reclamos.

Concretamente, podemos decir que los movimientos de desocupados observados –más allá de los que conforman el partido– acuerdan básicamente en tres cuestiones:

1. La construcción de un discurso de oposición a las becas y subsidios estatales en tanto no ven en esas medidas la respuesta a la demanda del sector. Suponen que ellas no confieren legitimidad ni significan empleo genuino y formal. Sin embargo, sí ven un avance en el programa de cooperativas, pues otorga más dinero por la prestación, que, además, se establece por medio de un contrato. Las organizaciones entienden que el contrato es un paso adelante porque acerca la posibilidad del empleo genuino, de lograr por fin “un contrato” de trabajo.

2. Una propuesta que considera a la tierra –en tanto propiedad para trabajar/explotar–, a la producción local y a la apertura de fábricas como los modos de salir de la crisis y de devolver legitimidad al trabajador.

3. Un acuerdo por parte de la mayoría de las agrupaciones que se consideran independientes de conformarse como una fuerza política, compren-

11 En referencia a lo dicho por el dirigente del MTD 17 de Julio durante una entrevista.

12 En: <http://www.chacoonline.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2605_mercedes-sanchez-emerenciano-sena-es-la-formula-de-los-movimientos-sociales&catid=81:provincia&Itemid=458>.

diendo que deben unirse entre organizaciones y cooperar a favor de quienes representan.

El hecho de organizarse para enfrentar electoralmente a los sectores políticos responde al reconocimiento de la necesidad de “ser políticos en un país democrático”: “A medida que fue pasando el tiempo, fuimos elevándonos y tenemos que ser políticos porque los pueblos democráticos son políticos” (T. L., MTD 17 de julio).

Las agrupaciones también reconocen que la participación política mediante la conformación de un frente¹³ es la única manera de conseguir modificar la situación de estos sectores, logrando el protagonismo y la participación en la toma de decisiones dentro de los estamentos de gobierno. La cuestión es, según lo declara un dirigente, institucionalizar la lucha: “Es necesario que institucionalicemos los reclamos sociales para que ya no se nos mire como revoltosos, sino[como] personas con una organización clara [...] y ser así parte de nuestro destino y no solo invitados de piedra como hasta hoy”.¹⁴ (E. Sena, MTD Emerenciano).

Mediante la formación del Frente expresan la necesidad de participar como ciudadanos pero no solo avalando las propuestas de otros sino proponiendo: “En las elecciones pasaremos de ser electores o meros militantes a ser candidatos con una propuesta seria” (E. Sena, MTD Emerenciano). Esto muestra que no se niegan a la política en su sentido más amplio sino a los partidismos: “No nos interesa, porque los partidos... la palabra se llama ‘partido’ y lo que hay que buscar es unir no partir. Por eso no creemos en los partidos” (T. L., MTD 17 de julio).

Asimismo, es propósito de la unión de varios movimientos sociales unificar criterios con la intención de ir eliminando con el tiempo la cuestión de las becas implementadas por el gobierno.

Se puede visibilizar, entonces, un posicionamiento de los grupos que responde al reclamo por una mejor distribución de la riqueza y de los recursos. Pese a que los gobiernos alegan que no hay fondos para el abastecimiento de los sectores excluidos, suponen que: “Los gobiernos dicen: ‘no, no hay’. Y nosotros decimos ‘sí, tiene que haber’, porque si hay para los Macri, para los Fortabat, para los Pérez Companc, para los Romero Feris, los Capitanich, tiene que haber para nosotros también” (T. L., MTD 17 de julio). Aluden así a que el problema no es la falta de dinero sino su concentración en grupos y familias de poder. Pero, además, plantean que la salida de la crisis económica y social es posible por la creación de reales puestos de trabajo a través de la industrialización de

13 Hacia octubre de 2010 se promovió un frente (Frente Político Social y Sindical –FPSS–) que congrega a agrupaciones populares –movimientos y sindicatos– con el objetivo de participar en las elecciones de 2011.

14 Diario *Primera Línea* 21/10/2010, en: <<http://www.diarioprimeralinea.com.ar/movimientos-y-gremios-lanzaron-un-frente-politico-comun-para-legitimar-la-lucha-social-4848.html>>.

la provincia, es decir, de la reactivación de la economía mediante la apertura de fábricas.

Estas dos propuestas se presentan como paradójicas en el sentido que, por un lado, sostiene un discurso en favor de la vuelta a un modo de producción industrial al que hoy no sabemos si es posible regresar –en todo caso, podríamos decir que abogan por el retorno a un modelo económico-social donde el ciudadano promedio tenía un espacio y un reconocimiento como trabajador, con beneficios sociales, identidad atribuida por el empleo y posibilidades de afiliación–; pero, por otro lado, se formula una crítica que tiene que ver no ya con el derecho al trabajo, sino con derechos sociales negados, donde los sujetos se reconocen carenciados pero, además, puestos en esa condición por una cuestión de clase: “Los negros siempre fuimos cuestionados por una clase y esta es una pelea de clases. Está la clase que comió todos los días, que vivió bien toda su sangre y no le importa si el chico nuestro come” (T. L., MTD 17 de julio). Esa clase a la que alude el entrevistado estaría compuesta por la otra parte de la sociedad: los religiosos (curas, evangélicos, otros), los políticos (de los partidos que fueran) y “todo aquel con un poquito de poder”. En este sentido, los sujetos construyen su identidad en relación no solo con su situación social –y económica– sino también con la mirada de los otros, partiendo de la idea de una no comunidad y una pronunciada desigualdad debida al rechazo de “la sociedad” y a su desvinculación de los sectores desfavorecidos. Al mismo tiempo, se sienten utilizados, “negreados”, sometidos por estos sectores.

En relación con lo anterior, consideramos que la participación que el Estado permite a los movimientos sociales puede ser interpretada, en ciertas ocasiones, como modos de institucionalizar a los grupos para evitar el conflicto. Las estrategias del juego se presentan a modo de acuerdo entre las partes, donde el gobierno dialoga y promete y el movimiento se apacigua –levanta los cortes y declara una tregua–. Se trata de una táctica para disciplinar a los grupos de modo que respondan según los intereses del gobierno y sacrifiquen su autonomía a favor de conseguir el sustento mensual:

El gobierno apostó a destruirnos. Nosotros veníamos cobrando un jornal de 1.200 y después –antes del acampe– nos cortó así como si nada, porque no le votamos al gobernador, a Coki no le votamos para la presidencia de la Cámara. Entonces, se nos dio un castigo de ocho meses, sin nada (G. G., MTD 17 de julio).

Los desocupados no pueden llamar a una huelga, porque esta es una figura legal reconocida para quien posee trabajo formal; y, como no pueden valerse de la interrupción de la producción, se valen de la interferencia en la distribución. Para Almeyra Casares (2005), el corte o piquete es un mecanismo utilizado estratégicamente con el cual la situación se politiza aún más, porque el enfrentamiento no es a un patrón como productor, sino al Estado, en tanto que

quienes se enfrentan son ciudadanos que reclaman una necesidad legítima –el trabajo– pero de un modo, según el autor, ilegítimo –el piquete.

Las movilizaciones, cortes y marchas frecuentemente son de repudio al gobierno y a sus ministros más representativos, aludiendo incumplimientos y, en ocasiones, exigiendo la renuncia de funcionarios.

El gobierno del Chaco, haciéndose eco de las medidas nacionales, abre las puertas –al menos así lo declara– a la negociación con movimientos sociales y organizaciones similares. Sin embargo, hemos observado que se discrimina entre movimientos que “cortan o no cortan las calles”,¹⁵ lo que comprende a los movimientos que están o no a favor del gobierno actual, pues las autoridades señalan que los cortes guardan intencionalidades políticas.

Acercamientos y tensiones

Por empezar, es posible ver un acercamiento del gobierno hacia los sectores movilizadas, así como una consideración de las propuestas gubernamentales por parte de las agrupaciones. Esta situación permite que se negocien los reclamos y que se intenten soluciones viables. No obstante, se está muy lejos de que se solventen todas las necesidades que, como lo admiten las propias agrupaciones, tienen que ver con condiciones estructurales de marginalidad, pobreza y exclusión que incluyen a amplios sectores y no solo a los movilizadas.

En el discurso de los movimientos encontramos posturas que comparten tintes similares. Destacamos, por un lado, cuestiones como la mirada acerca del gobierno y acerca de los programas sociales y, por otro, la relación con la política en sentido amplio, pues la consideración sobre ella permite el planteo de una propuesta en tanto proyecto político de los movimientos.

Hemos encontrado que entre el gobierno y los movimientos de desocupados se presentan diversas tensiones. La primera tensión surge de contrastar el discurso gubernamental –que alienta la inclusión de los ciudadanos, su participación y la promoción de una ciudadanía comprometida– con la consideración de los movimientos de desocupados acerca de que el gobierno pretende desplegar lo que podemos pensar como prácticas de disciplinamiento que pretenden inmovilizar a los grupos por medio del clientelismo y la promoción de la subsidiaridad,¹⁶ para que detengan las marchas y movilizaciones y dejen de deslegitimar al gobierno.

15 A mediados de 2009 (el 21/04), el gobernador, junto a otros funcionarios, se reunió con 40 organizaciones sociales que declararon su apoyo a la gestión de Capitanich y al trabajo que en conjunto venían realizando (véase <<http://www.datachaco.com/noticia.php?numero=19551>>. Fecha de consulta: 25/06/2011).

16 “[...] aunque la demanda central de los piqueteros siempre fue por trabajo, los diferentes gobiernos desarrollaron una política de contención del conflicto a través del otorgamiento de subsidios [...]. Desde el comienzo, las organizaciones piqueteras vivieron con ambivalencia esta dependencia respecto del Estado, que las insertaba claramente en los marcos de un modelo asistencial” (Svampa, 2009).

En este sentido, los movimientos consideran que el gobierno pretende mantenerlos dentro de una situación de precariedad, como “ignorantes y dependientes”, por medio de modalidades que juzgan cortoplacistas e inestables, razón por la cual se sienten utilizados. Las agrupaciones ponen en duda la eficacia a largo plazo de medidas como las becas, los planes y programas públicos, y su capacidad de garantizar dignidad y legitimidad a los beneficiados, dada la informalidad de las propuestas.

Sin embargo, la postura oficialista dice apelar a la generación de nuevos modos de asistencia que progresivamente se alejarían de la subsidiaridad.¹⁷ Según esta mirada, la oferta de asistencia que se inicia desde la política social actual respondería a una lógica distinta, donde la promoción de la economía social toma partido abriéndose a la organización de la comunidad, a la construcción de vínculos solidarios y de un espacio colectivo y a la movilización popular. No obstante, para Lo Vuolo (2009), una medida como el actual programa “Argentina Trabaja” disimula infructuosamente su parecido con otros programas asistenciales de empleo forzado. Este autor sostiene que la figura de estas supuestas cooperativas de trabajo oculta la presencia de una relación asalariada entre los beneficiarios y el Estado que es el que fija las reglas del contrato laboral.

Pero, además, estas medidas no significan para los sujetos afectados la posibilidad de discutir la distribución de la riqueza; la concepción que subyace es que son los sectores desfavorecidos quienes deben procurarse los medios para asegurar la resolución de sus necesidades, en tanto que “[...] el Estado solo debe acompañar y fortalecer, mediante la política social, las iniciativas que provengan de ese sector” (Sarmiento, Tello y Segura, 2007).

Por otro lado, desde los movimientos sociales la tensión se despliega, como diría Merklen (2005), entre la urgencia y el proyecto, es decir, entre el desarrollo de estrategias racionales para la supervivencia *versus* un proyecto político común.

El discurso que los movimientos de desocupados han construido desde su aparición en la escena pública parte del reclamo por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, especialmente por el acceso al empleo genuino. “Tenemos trabajo”, dicen los entrevistados. Están ocupados; pero las medidas dispuestas no garantizan seguridad a largo plazo; más bien responden a necesidades inmediatas. Y esta situación los coloca en la incertidumbre y, al mismo tiempo, en la expectativa de conseguir participación, de ser incluidos en nuevos programas sociales, de ser adjudicatarios de otras becas o subsidios. En tal sentido, Merklen (2005) plantea que las organizaciones debieron convertirse en “cazadores” de políticas públicas, lo que les requiere conocer los tiempos oportunos y los medios

17 Reconociendo que los gobiernos que se queden en la política de asistencia “pueden llegar a legitimar el fundamentalismo del mercado desde un concepto ‘*utilitarista*’ (negritas en el original), creando dependencia, relegando la cuestión del empleo a un segundo plano” (Kirchner, 2010b).

de gestionar los programas. Si comprendemos esto, es fácil entender que los sujetos se vinculen con la política de múltiples maneras. Para el mismo autor, la acción individual o colectiva es al mismo tiempo tanto “estratégica” como “ideológica” o “expresiva”. Esto significa que es posible ser parte de una red clientelar y, al mismo tiempo, protestar en contra de la corrupción.

Sin embargo, las organizaciones van creciendo al fragor de la lucha y se descubren no solo en el derecho ciudadano de participar sino también en el de decidir. En este sentido, observamos que las organizaciones se reconocen preparadas para disputar cargos políticos y defender los intereses que consideran del “pueblo”.

A MODO DE CIERRE

El escrito presentado pretendió ofrecer un breve panorama de la relación entre el gobierno provincial y los movimientos de desocupados, teniendo en cuenta un modelo de política nacional que la actual gobernación aplica en la Provincia del Chaco. Específicamente nos interesó ver qué medidas se implementan para la atención de las demandas de las agrupaciones mencionadas y las posiciones y estrategias que asumen esas organizaciones en relación con estas medidas y con los intereses del movimiento.

Cabe aclarar que las conclusiones a las que hemos arribado tienen que ver con comentarios y afirmaciones de dirigentes y participantes de aquellos movimientos de desocupados que consideramos más representativos de la provincia y con más apariciones en la escena pública. Además, de ningún modo creemos que estos resultados sean generalizables y aplicables a todo contexto y grupo; en todo caso, intentamos reproducir y dar sentido a una mirada que parece ser compartida y sostenida por diversas agrupaciones. Tampoco significa que sea la verdad de la cuestión o que apoyemos a algunas de las partes. Simplemente, hemos tratado de poner en discusión la postura oficial e intencionada del gobierno frente a las consideraciones elaboradas por un sector muy afectado por las políticas públicas.

Podríamos decir que, si bien se admiten acercamientos entre los movimientos y organizaciones de desocupados y el gobierno y viceversa, esta es una relación compleja. Por un lado, las agrupaciones reclaman y aceptan medidas –por el momento– secundarias para atender a la precaria situación actual; pero ello no implica una adhesión a las estrategias del gobierno ni a su modo de “hacer política”; por el contrario, según los testimonios, se oponen a las gestiones actuales y anteriores de la provincia.

Por parte del gobierno, la lectura que se ofrece es la de considerar a los movimientos como agentes activos de los barrios o sectores que representan, que permiten el acercamiento del Estado a los mismos y el despliegue de las políticas públicas. De todos modos, los sujetos observados en esta oportunidad

no se consideran representados y juzgan que se trata de medidas “pobres” para seguir siendo pobres.

Por último, y pese a su gran heterogeneidad, la mayoría de las agrupaciones de desocupados coinciden en un pensamiento político que los descubre capacitados para cargos públicos. La lucha iniciada en la provincia hace más de diez años construyó una posición legitimada por muchos sectores carenciados y una mirada particular acerca de las necesidades de los mismos. A partir de ello, estas organizaciones se autoproclaman como quienes conocen a la gente y quienes deben pugnar por “institucionalizar la lucha”, reconociendo de ese modo la necesidad de ser políticos y de integrar los cuerpos legislativos para, verdaderamente, representar al pueblo.

BIBLIOGRAFÍA

ALMEYRA CASARES, G. (2005), “Los movimientos sociales en Argentina 1990-2005”, en *Argumentos*, núm. especial 48-49, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, pp. 43-68. Disponible en: <<http://re-dalyc.uaemex.mx/>>.

ANSALDI, W. (2007), “Tanto andar a los mandobles para terminar a los besuqueos: acerca de la relegitimación de los políticos argentinos”, en *Varia historia*, vol. 23, n° 38, Belo Horizonte, pp. 438-459, julio/diciembre.

EGUÍA, A. et al. (2007), *Sobre el concepto de participación*, en A. EGUÍA y S. ORTALE (comps.), *Programas sociales y participación en la Provincia de Buenos Aires*, La Plata (Pcia. de Buenos Aires, Argentina), EDULP.

GIOSA ZUAZÚA, N. (2006), *La estrategia de la administración Kirchner para enfrentar los problemas del mercado de empleo*, Buenos Aires, CIEPP, Serie Análisis de Coyuntura n° 12, julio. Disponible en: <<http://www.ciepp.org.ar/coyuntura.htm>>.

KIRCHNER, A. (2010a), *Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular*, Tomo I, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Disponible en: <<http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/ii/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf>>.

----- (2010b), *Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular*, Tomo II, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Disponible en: <<http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/ii/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20Sociales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20II.pdf>>.

LO VUOLO, R. (2009), *El programa “Argentina Trabaja” y el modo estático de regulación de la cuestión social en el país*, Buenos Aires, CIEPP, Documento de trabajo n° 75, marzo. Disponible en: <<http://www.ciepp.org.ar/trabajo.htm>>.

MASSETTI, A. (2008), “Cuando los movimientos se institucionalizan. Las organizaciones territoriales urbanas en el gobierno de Buenos Aires”, en G. DELAMATA (coord.), *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil*, Buenos Aires, Editorial Biblos.

MERKLEN, D. (2005), *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, Buenos Aires, Gorla, 1ª ed.

MIRZA, C. (2006), *Movimientos sociales y sistema político en América Latina: la construcción de nuevas democracias*, Buenos Aires, CLACSO, Programa Regional de Becas.

NEGRI, T. *et al.* (2008), *Imperio, multitud y sociedad abigarrada*, La Paz, CLACSO coediciones (CLACSO/Muela del diablo/Comunas/Vicepresidencia del Congreso Nacional Boliviano).

OVIDO, L. (2004), *Una historia del movimiento piquetero*, Buenos Aires, Ediciones Rumbos.

PALOMINO, H. (2005), “Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina”, en E. DE LA GARZA TOLEDO (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, Colección Grupos de Trabajo de CLACSO.

SARMIENTO, J., C. TELLO y R. SEGURA (2007), “Ciudadanía, sociedad civil y participación en políticas públicas. La experiencia de los Foros Vecinales de Seguridad en el municipio de La Plata”, en *Rev. Katál*, vol. 10, n° 2, Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina, pp. 187-196, julio/diciembre. Disponible en: <<http://redalyc.uamex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=179613965006>>.

SVAMPA, M. (2005), *La sociedad excluyente*, Buenos Aires, Editorial Taurus.

----- (2008), *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1° edición.

SVAMPA, M. y S. PEREIRA (2009), *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 3^{ra} ed.

RESUMEN

El presente artículo presenta resultados parciales de un proyecto de investigación que indaga en torno a la participación ciudadana y su incidencia en la conformación de procesos emancipatorios. Dentro de este marco, definimos a los movimientos sociales en tanto organizaciones que se conforman en espacios de participación, dentro de las cuales –en razón de los rasgos que posean–, suponemos, se habilitarían prácticas reproductivas o transformadoras.

En esta ocasión, nos interesa reflexionar acerca de la relación entre los movimientos sociales “piqueteros” –es decir, los compuestos por trabajadores desocupados– de la Provincia del Chaco y el gobierno provincial actual. Para ello, indagamos cuáles son y cómo son presentadas desde el discurso oficial las políticas sociales implementadas para la atención de sectores empobrecidos. Por otro lado, nos interesa especialmente la mirada de las organizaciones acerca de los posibles efectos de las políticas públicas actuales así como las propuestas que surgen de sus perspectivas. Es pertinente, además, aclarar que la cuestión de la participación aparece como un eje transversal del artículo, dado que tal concepto es utilizado como un recurso tanto en el discurso oficial como en el de las agrupaciones.

De este modo, en primer lugar, se propone un repaso sobre el surgimiento de los movimientos piqueteros; en un segundo momento, se realiza una síntesis de las medidas políticas dictadas por el gobierno nacional y aplicadas en la provincia; en tercer lugar, se ofrece una descripción de los movimientos en la región; por último, se consideran las propuestas que plantean las organizaciones sociales.

ABSTRACT

This article presents partial result of a research project that investigates about citizen participation and its impact in shaping emancipatory process. Therefore, we define social organizations that are formed in space of participation, within which, because of the features that have, we suppose would be enabled reproductive or transformative practices. On this occasion, we want to reflect on the relationship between social movements –“piqueteros”– of the Chaco Province and the provincial government today. Then, we inquire what they are and how they are presented from the official social policies implemented for the care of impoverished areas. We are particularly interested in the perspective of organizations about the potential impact of current public policies and proposals that emerge from their perspectives.

It is pertinent also to clarify that the issue of participation appears as a transverse axis of the article, since this concept is used as a resource both in the official discourse and in the clusters. Thus, in the first place, we propose an overview of the emergence of “piqueteros” movement; in a second time, it provides a synthesis of policy measures dictated by the national government and implemented in the province; and thirdly, it offers a description of the movements in the region. Finally, we considered the proposals raised by social organizations.

PALABRAS CLAVE

MOVIMIENTOS SOCIALES
PIQUETEROS
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN

KEY WORDS

SOCIAL MOVEMENTS
“PIQUETEROS”
PUBLICS POLICIES
PARTICIPATION